

Los Militares en la Política Chilena*

LIISA NORTH

El 11 de septiembre de 1973, el intento de crear una sociedad democrática socialista en Chile llegó a un fin violento por un golpe de Estado. Al contrario de lo que esperaba Allende, los dirigentes de la Unidad Popular y la base de las masas, una división suficientemente significativa para provocar una guerra civil no se dio en las fuerzas armadas. Desde que ocurrió el golpe, han aparecido un número cada vez mayor de análisis que buscan las causas y razones fundamentales de la falta de capacidad de la Unidad Popular para mantenerse en el poder. Tales análisis han documentado el papel de los Estados Unidos en el estrangulamiento de la economía chilena por medio de boicots de crédito, tirar sus reservas de cobre, y otras cosas por el estilo; en el caos económico creado por huelgas patronales, mercados negros y la especulación organizada por asociaciones empresariales (los gremios), en la atenuación del poder gubernamental para contener el desorden económico y social cada vez mayor como consecuencia del obstruccionismo de los partidos Nacional y Democrático Cristiano en el Congreso y en la división interna en la coalición de la Unidad Popular que hizo difícil para el gobierno actuar de una manera consistente y decisiva.¹ Desde luego que las causas fundamentales del golpe no se pueden encontrar en las fuerzas armadas. Sin embargo, en la misma medida en que los análisis del golpe se han llevado a cabo en una laguna de información en lo que se refiere a aquellas instituciones y a su interacción con el gobierno de la Unidad Popular, Allende y sus consejeros han sido acusados de una política en general débil e ingenua frente a las fuerzas armadas.

Obviamente el gobierno de la Unidad Popular cometió errores en la formulación de una estrategia general que le hubiera permitido permanecer en el poder y lograr la transición hacia el socialismo. También se cometieron errores en la táctica usada frente a las fuerzas armadas. Las sugerencias respecto de la organización de las milicias populares y de la destitución de oficiales sospechosos de desleales, sin embargo, ignoran

* Traducción de Mónica Manzur.

la realidad de las organizaciones militares chilenas: su capacidad y organización y su autonomía profesional celosamente cuidada en lo que se refiere a promociones, asignaciones y destituciones, tanto como su monopolio sobre armas.² La formulación de una estrategia para evitar que las organizaciones militares profesionales intervengan para dar fin a un proceso revolucionario fue y es extremadamente difícil. Intentaré analizar aquí la estrategia adoptada por el gobierno de la Unidad Popular.

Naturalmente, la estrategia de la Unidad Popular frente a las fuerzas armadas fue una parte de su estrategia general para mantener el poder y llevar a la práctica la transición al socialismo. En general, se basaba en la posibilidad de trabajar a través de las estructuras institucionales del Estado que ya existían, dada su fuerza y relativa autonomía dentro del sistema político democrático de Chile. Según el análisis que hizo el consejero político personal de Allende, Joan Garcés, más específicamente se basaba en la adaptación del gobierno de la Unidad Popular a las normas constitucionales, y su capacidad de mantener el orden público y una cantidad razonable de estabilidad económica, si no un real crecimiento.³ El mantenimiento de tales condiciones, junto con las amplias garantías y los numerosos beneficios que prometía el Programa de la Unidad Popular⁴ a la gran clase media del país, se consideraban necesarios para ganarse, o por lo menos neutralizar, a aquel sector de la población tan poderoso y bien organizado. Desde luego que la neutralización significaba evitar la alianza de la clase media con los grandes terratenientes y los grandes industriales burgueses que encabezarían una oposición agresiva en su lucha por mantenerse perderían control sobre los medios de producción. Esta estrategia, muy dependiente de una clase media partidaria o neutral, implicaba la necesidad de una clase trabajadora controlada y disciplinada y de una movilización campesina en apoyo al gobierno. Una acción multitudinaria espontánea e "ilegal" amenazaría el orden público o, por lo menos, proporcionaría material para propaganda antigubernista poderosa a la cual responderían muy positivamente tanto la clase media como las fuerzas armadas.

El análisis de Garcés y los estudios sobre la Unidad Popular en general manifiestan una conciencia aguda de los instrumentos de control disponibles del Estado, y la importancia de la clase media en el sistema político. Aunque tales cuestiones fueron examinadas cuidadosa y extensamente, fueron apenas analizadas las formas que habrían de tomar la clase obrera disciplinada y la movilización campesina. De hecho, Garcés limitó la "presión social desde abajo" a "casos específicos u objetivos muy concretos".⁵ Esto implica que la movilización de las mayorías para una transformación socialista no fue considerada un proceso continuo que debía iniciarse desde el momento en que la Unidad Popular asumió el poder. Las implicaciones de tal orientación se tratarán cuando esté completo el análisis de la estrategia de la Unidad Popular frente a los militares.

Las condiciones que se consideraban necesarias para obtener el apoyo o la neutralidad de sectores significativos de la clase media eran también

las necesarias para mantener la lealtad del cuerpo oficial de las fuerzas armadas, o por lo menos de un número suficientemente grande de oficiales para evitar un golpe exitoso de la derecha. Además, las fuerzas armadas compartían algunas normas o problemas institucionales que el gobierno de la Unidad Popular podía utilizar para mantener su lealtad. De todas maneras se trataba de evitar una política de confrontación directa. Aunque las posibilidades de ganar algún apoyo dentro del cuerpo oficial y de neutralizar a la mayoría dependían fundamentalmente del éxito de la estrategia general, mi objetivo principal aquí es el análisis de la estrategia de la Unidad Popular frente a las fuerzas armadas.

Para lograrlo, es necesario revisar los hechos conocidos respecto de la historia, las formas de reclutamiento de oficiales y la capacidad de las fuerzas armadas chilenas, entre las cuales incluyo a los carabineros (una fuerza policiaca nacional militarizada), y al ejército, la marina y la fuerza aérea.⁶ Dada la tradición de no intervención de las fuerzas armadas chilenas, no han sido objeto de ningún estudio extenso. Sólo hay dos trabajos importantes disponibles sobre su estructura contemporánea, pero los dos son limitados en alcance y en información.⁷ Y muchos de los acontecimientos clave en la interacción del gobierno de Allende con las fuerzas armadas deben aún ser aclarados. Por lo tanto, el análisis presentado aquí necesariamente es tentativo.

Historia política de los militares chilenos

A diferencia de la mayoría de instituciones militares de América Latina, las fuerzas armadas chilenas han tenido una tradición histórica de no intervención en el proceso político. Más precisamente, las intervenciones habían sido lo bastante poco frecuentes para permitir el desarrollo de un mito —compartido por la población militar y por la civil— de neutralidad y apolítica de las fuerzas armadas. El último golpe de Estado anterior al del 11 de septiembre ocurrió el 13 de septiembre de 1932; su meta era la organización de elecciones para restablecer los procedimientos democráticos normales después de un período de inestabilidad, dictadura y conspiraciones e intervenciones militares que habían comenzado en 1919.

La participación política abierta de las fuerzas armadas durante el período de 1919 a 1932 básicamente se relacionaba con los agudos problemas económicos y con los intensos y muchas veces violentos conflictos sociales que experimentaba Chile en aquella época. Con la espectacular expansión de la industria de exportación de nitrato en territorios conquistados de Perú y Bolivia durante la Guerra del Pacífico (1879-1883) y con el crecimiento de la industria de exportación de cobre a principios de este siglo, Chile experimentó un proceso rápido de cambio social y de desarrollo económico capitalista. Se establecieron industrias nacionales, el tamaño de la burocracia estatal aumentó rápidamente y la gente inmigró a las ciudades. Ya en 1920 un 46.4% de la población vivía en centros

urbanos de 2,000 o más; el 28% vivía en ciudades de 20,000 o más. Al mismo tiempo aparecieron una clase media y una clase obrera bastante grandes. Particularmente durante la segunda década del siglo xx estas dos clases empezaron a organizarse (frecuentemente en conflicto entre ellas y de manera independiente), y a exigir reformas políticas y sociales para corromper fenomenalmente a los gobiernos que representaban los intereses de la oligarquía constituida por grandes terratenientes, ricos financieros, comerciantes y empresarios mineros chilenos que trabajaban con inversión extranjera. La lucha de los obreros en particular fue muy amarga: en diciembre de 1907, dos mil hombres, mujeres y niños fueron fusilados por el ejército durante una manifestación de mineros de nitrato en Santa María de Iquique; entre 1911 y 1920 hubo 293 huelgas, muchas de las cuales fueron violentamente reprimidas. Además, la lucha por una reforma, en especial después de la primera guerra mundial, se llevó a cabo en una situación económica cada vez más deteriorada, que era consecuencia del desarrollo de la producción de nitrato sintético en otras partes y del decaimiento de la postguerra.

En tal situación, las organizaciones militares (especialmente el ejército) empezaron a conspirar seriamente en 1919 y por fin intervinieron el 5 de septiembre de 1924 para apoyar programas de reforma que estaban respaldados por la clase media y por sectores importantes de la clase obrera⁸. La situación, en algunos aspectos formales, era paralela a la de la presidencia de Allende. El candidato reformista que alcanzó la presidencia en 1920 no logró la aprobación de su programa en el Congreso que estaba controlado por la oposición oligárquica. Al contrario de lo que sucedió en 1973, en 1924 los oficiales jóvenes del ejército intervinieron para forzar la aprobación de las propuestas de reforma del presidente⁹.

El efecto de la intervención militar de 1924 y su secuela adelantó el proceso de participación de la clase media y la representación de sus intereses en el aparato de Estado. El protagonista del proceso político que empezó con la elección presidencial de 1920 fue la clase media; la clase obrera participó en una posición secundaria. A medida que las exigencias de la clase media se satisfacían aunque mínimamente, los gobiernos de los últimos años de los veintes y los primeros de los treintas se ocuparon de la represión de organizaciones obreras y particularmente del partido comunista. No fue sino hasta mediados los treintas que las organizaciones obreras comenzaron a conseguir libertad de operación.

Significativamente, las instituciones militares intervencionistas del período 1919-1932 gozaban ya de una tradición de profesionalismo apolítico. Y, en efecto, los oficiales intervinieron en el proceso político de 1924 sólo cuando un número considerable estaba convencido de que los políticos civiles eran incapaces de resolver la crisis. Los oficiales del ejército estaban especialmente preocupados por los efectos que sobre la moral y la disciplina tendría la represión en la que tantas veces debieron participar. En 1924, por lo tanto, estos oficiales solicitaron al Congreso que "des-

pachara las leyes que exigía la clase obrera para dar fin a su angustia, que... afecta a las tropas, quienes no deberían estar en contacto con la agitación popular.”¹⁰ Poco después de esta intervención, los carabineros (una parte de la caballería del ejército) se reorganizaron para formar “una fuerza policíaca nacional, integrando a los antiguos carabineros con las fuerzas policíacas urbanas.”¹¹ El ejército, de este modo, se liberó de los deberes que se relacionaban con mantener el orden interno, con excepción de emergencias mayores.

Las conspiraciones e intervenciones de los militares entre 1919 y 1932, por lo tanto, fueron una respuesta a los agudos conflictos económicos, sociales y políticos. En especial los oficiales más jóvenes del ejército —que desde 1880 provenían cada vez más de la clase media— intervinieron para respaldar las demandas de reforma de su clase de origen para establecer la paz social.

Una razón secundaria, pero de todas maneras importante, de la conspiración de 1919 y de la franca intervención de 1924 se relacionaba con varios problemas específicos de las instituciones militares. Muchos oficiales fueron movilizados hacia la acción política especialmente sobre la base de quejas profesionales. Éstas incluían: la violación de principios militares profesionales de mérito y prioridad por parte de políticos y miembros de la élite, quienes habían hecho maniobras para obtener promociones y asignaturas privilegiadas para sus amigos y parientes; la negligencia por parte de los políticos de proveer fondos para el equipo necesario y salarios bajos o la falta de pago de salarios durante los meses que precedieron el golpe de 1924.¹²

Entre 1932 y 1970 los conflictos sociales en Chile nunca fueron lo bastante agudos para provocar una intervención militar. La clase media estaba completamente integrada al aparato de Estado durante los treinta y los cuarentas. Las organizaciones izquierdistas de la clase obrera (el Partido Comunista, el Partido Socialista y los sindicatos) no tuvieron unidad hasta los años cincuenta y se ocupaban en especial de la política electoral, aunque nunca amenazaron seriamente el poder ni los privilegios de las clases media y alta. En tal situación de competencia política ordenada, de algún crecimiento económico y de conflictos sociales relativamente atenuados, la tradición militar de profesionalismo y apolítica, de respeto a la constitución y al proceso democrático, pudo ser restituida y fortalecida.

Durante los 41 años anteriores a la elección de Allende, las fuerzas armadas chilenas restablecieron una fuerte cultura profesional tan apolítica que los oficiales subordinaban sus propias opiniones políticas a las normas profesionales de las instituciones militares, que legalmente respetaban la Constitución. Según Hansen, resumiendo las afirmaciones de 37 generales del ejército retirados, “cualquier ruptura de la norma de no participación en política de partidos resultaba en un retiro antes de tiempo. El oficial no sólo no debía tener contacto con los grupos políticos orga-

nizados, sino que también debía presentar una imagen de neutralidad política.”¹³ La tolerancia de una desviación de las normas, sin embargo, variaba según si era hacia la izquierda o hacia la derecha. Mientras por una parte “un compromiso manifiesto con cualquier filosofía política hacía peligrar la carrera de un oficial”, por la otra los compromisos abiertos con la “izquierda radical” eran especialmente desaprobados¹⁴.

El restablecimiento de una fuerte cultura profesional dentro de las instituciones militares y la aplicación de sanciones contra oficiales que tuvieran compromisos políticos abiertos fueron, de hecho, estimulados en especial por tres golpes de Estado que ocurrieron en 1932¹⁵. La aplicación de criterios políticos en promociones y asignaciones y una serie inevitable de intervenciones, inestabilizaron el futuro de algunas carreras y crearon resentimientos. Además, uno de los golpes de 1932 fue particularmente ofensivo a las clases media y alta: el 4 de junio el coronel de la fuerza aérea, Marmaduke Grove, dirigió un golpe con el que se estableció la “República Socialista de Chile”. Aunque Grove y sus asociados rápidamente fueron depuestos en otro golpe (el 16 de junio), su éxito efímero apareció como una amenaza escandalosa para las clases más ricas. Hacia fines de 1932, el cuerpo oficial buscaba nuevamente un aislamiento de la política, a medida que el caos institucional se acercaba más y que el prestigio descendía:

Durante varias semanas, los oficiales fueron socialmente excluidos y abiertamente mofados por el público. Muchos oficiales fueron retirados y el presupuesto militar de 1933 fue cortado drásticamente. Además, para asegurarse contra más intervenciones, se organizó una milicia civil que permaneció activa hasta 1936¹⁶.

Esta milicia estaba formada por los hijos de gente de las clases media y alta, y se formó para mantener en línea a los oficiales que tuvieran perspectivas políticas radicales y a los civiles de izquierda.

Fundamentalmente, lo que imposibilitó las intervenciones militares entre 1932 y 1973 fue el ejercicio de una dirección civil fuerte, capaz de moderar el conflicto social al satisfacer las exigencias más importantes de la clase media y al limitar las concesiones a los obreros. Sin embargo, también fue importante la incorporación de normas profesionales de neutralidad política por parte de los oficiales. Podría decirse que la ideología del cuerpo oficial durante esa época era principalmente constitucional y profesional, aunque ésta sería una ideología relativamente frágil en una sociedad con conflictos sociales agudos. No obstante, la cultura militar profesional era una realidad: tuvo significativas consecuencias en su conducta.

Aunque no hubo ninguna intervención militar abierta en la política entre 1932 y la elección de Allende, hubo bastantes conspiraciones dentro de las organizaciones militares, en especial en el ejército. Es significativo el hecho de que tales conspiraciones se basaran más que nada en agravios

institucionales, lo cual no quiere decir que los dirigentes de las conspiraciones (al contrario de la mayor parte de quienes los apoyaban) no tuvieran una motivación política. Una conspiración de 1939 definitivamente tenía una orientación fascista, ya que se dirigía contra el gobierno del Frente Popular que estaba apoyado por los partidos socialista y comunista y dirigido por el Partido Radical.¹⁷ Una conspiración incipiente en 1946 estaba inspirada en el peronismo e incluía cierta participación de varios dirigentes políticos socialistas.¹⁸ Una conspiración en 1948 fue inspirada por una combinación de quejas de tipo corporativista y por el nacionalismo peronista.¹⁹ La ideología peronista se puede distinguir otra vez en algunas conspiraciones organizadas entre 1951 y 1955.²⁰ (Los conspiradores de 1955 fueron sometidos al consejo de guerra en 1956, "acusados de conspiración, falta de disciplina y violación del principio de jerarquía y del principio de apolítica del ejército."²¹) El dirigente de una conspiración que terminó en una rebelión en 1969, el general del ejército Roberto Viaux, manifestó después su posición política de extrema derecha; sin embargo, en 1969 el apoyo y la simpatía que recibió de las fuerzas armadas se basaba principalmente en reclamaciones profesionales institucionales.²² Aparentemente eran pocos los oficiales involucrados en la mayor parte de las conspiraciones, y cuando eran descubiertos, eran castigados por las mismas organizaciones militares.

Las quejas institucionales que se planteaban en tales conspiraciones, y particularmente en el ejército, no eran simples fabricaciones para encubrir metas políticas. Después de la segunda guerra mundial, el porcentaje del presupuesto nacional dedicado a las fuerzas armadas siguió disminuyendo, con pocas interrupciones. Mientras todos los sectores de las fuerzas armadas resintieron la baja, el ejército parece ser el que más la sufrió, ya que el presupuesto de defensa disminuyó de 41-42% a 35%. "El resultado de esta doble reducción fue que la parte correspondiente al ejército del presupuesto de 1964 era sólo alrededor del 40% de lo que había sido antes de la guerra."²³ Esta tendencia tuvo un impacto obviamente negativo sobre la capacidad para mantener el equipo, el reclutamiento usual y los salarios de los oficiales. A mediados de los sesenta, en comparación con otros grupos profesionales, por lo menos en el ejército los salarios de los oficiales eran extremadamente bajos, y se consideraban así no sólo por los oficiales mismos, sino también por civiles de las clases media y alta. ...el salario de un subteniente era tan bajo como el de cualquier trabajador. Las esposas de tenientes, capitanes y comandantes sin medios independientes del ejército estaban obligadas a trabajar para suplementar el ingreso familiar. Frecuentemente las esposas que trabajaban como secretarias ganaban más que sus maridos que eran oficiales del ejército. Las dificultades económicas con que se enfrentaba un oficial, especialmente de rangos inferiores, no era cuestión de lujos, sino de casa y ropa decentes y de una educación para sus hijos.²⁴

La situación de los oficiales de los carabineros era substancialmente la

misma, mientras que los salarios de los oficiales de la marina y de la fuerza aérea eran un poco más altos.²⁵

En 1970, ¿qué generalizaciones se pueden derivar de la historia de las posibilidades de intervención militar? En primer lugar, problemas económicos agudos combinados con conflictos sociales y políticos probablemente podrían provocar una intervención militar. En segundo lugar, la mayor parte del cuerpo oficial era aparentemente constitucionalista; por lo tanto, los conflictos sociales y políticos tendrían que llegar a un momento crítico para que las fuerzas armadas accedieran a intervenir. En tercer lugar, históricamente los conspiradores militares podían conseguir apoyo no sólo sobre la base de reclamaciones políticas, sino también por reclamaciones profesionales institucionales. En cuarto lugar, los oficiales que participaron en las conspiraciones habían sido tanto "progresistas" como de derecha. La razón de que los conspiradores peronistas nacionalistas fueran considerados progresistas es que sectores significativos del socialismo chileno pasaron por un período ideológico peronista en los años cuarenta y cincuenta, y —como se dijo antes— los dirigentes socialistas estaban en contacto con oficiales peronistas.

Tales generalizaciones no se pueden aplicar de la misma manera a todas las ramas de las fuerzas armadas. Las tendencias progresistas fueron significativas en el ejército y los carabineros; por razones que se desarrollarán más adelante, eran débiles en la fuerza aérea y casi inexistentes en la marina. No obstante, la historia de las fuerzas armadas chilenas proporcionó un fuerte fundamento para la idea de los dirigentes de la Unidad Popular de que existían elementos nacionalistas y progresistas dentro del cuerpo oficial y que sería difícil provocar a la mayoría constitucionalista a una intervención, en especial si la política de la Unidad Popular respondía a los más importantes problemas institucionales de las fuerzas armadas. En otras palabras, había lugar para maniobrar.

Proveniencia social y relaciones sociales del cuerpo oficial

A partir de la última década del siglo XIX, el cuerpo oficial del ejército chileno provenía cada vez más de la clase media. Llegada la década de los cuarenta, el dominio de la clase media entre los oficiales era completo, y durante los años cincuenta y sesenta, dado que disminuía el prestigio de la institución, se comenzó a reclutar cadetes también de la clase media baja.²⁶ Sin embargo, la única información general sobre el reclutamiento social de los oficiales del ejército se limita al retiro de 37 generales entre 1952 y 1964. Sus padres eran hombres de negocios (20%), profesionistas y administradores (26%), oficiales militares (26%), granjeros (20%) y empleados de oficina (9%).²⁷ Si la ocupación de los padres de estos generales es de alguna manera representativa del cuerpo oficial del ejército en general, la mayoría provenía precisamente de aquellas categorías socia-

les que hacia fines de 1972 querían provocar una intervención militar para derrocar a Allende, a través de actos como por ejemplo la participación o el apoyo de la "huelga de jefes" de octubre.

La clase de origen de los oficiales desde luego no es el único factor social en su experiencia. Como oficial, ocupa una posición de clase media, y en general se casa con alguien de una categoría social igual o más alta que la suya. En Chile, como en todas partes, las primeras tareas asignadas a los oficiales son casi siempre en provincia. Allí,

la mayor parte del contacto informal de los oficiales... era con miembros de la clase alta rural: terratenientes, profesionistas, comerciantes y la gente de ciudades de provincia con "medios"... Los oficiales eran aceptados en la provincia como miembros del conjunto. Eran invitados a los eventos sociales y eran considerados (y ellos mismos también se consideraban) esposos posibles para sus hijas.

Puesto que la gran mayoría de los puestos militares se encontraban en la provincia, y como todos los oficiales debían pasar un período específico en cada rango en una posición de mando, *mantenían un contacto constante con la clase alta rural a través de su carrera.* Esta asociación continua se reflejaba en el porcentaje relativamente alto de los ... parientes políticos de los generales ... quienes tenían ocupaciones típicas de la clase alta rural: agricultura y comercio.²⁸

Para precisar más, fue en especial en el sur de Chile donde los oficiales establecieron contacto con la clase alta rural o, en otras palabras, con miembros de la aristocracia terrateniente del país. En el norte desértico, la clase de profesionistas y comerciantes con quienes se relacionaban los oficiales, aunque localmente era la clase alta, en términos nacionales formaba parte de la clase media.²⁹ Los oficiales de los rangos más altos pasaban más tiempo en Santiago o sus alrededores donde están las escuelas de educación superior y el cuartel general y las guarniciones más importantes del ejército. Allí su contacto social con civiles y amistades se establecía principalmente entre miembros de "la nueva clase media urbana: profesionistas, administradores y burócratas."³⁰

En resumen, el típico oficial del ejército pertenece a la clase media tanto por su ocupación como por la de su padre. Sus relaciones sociales civiles se establecen en la clase media y, en la medida en que son representativos los datos antes mencionados, en la clase alta de provincia. No existe ni siquiera una limitada información sistemática sobre el origen social del cuerpo oficial de los carabineros, la fuerza aérea o la marina. Sin embargo, algunos observadores que conocen la historia política y la estructura social de Chile en general están de acuerdo en que los oficiales de los carabineros, mucho más que los del ejército, son hijos de familias de la clase media baja e incluso de familias de obreros, mientras que la fuerza aérea y en especial la marina reclutan más oficiales de la clase media alta. Estos dos últimos sectores de las fuerzas armadas aparentemente gozan de más prestigio, debido a su tecnología más avanzada, a la

posibilidad de transferir su entrenamiento técnico a ocupaciones civiles atractivas y tal vez a las mayores oportunidades para viajar. La marina, en especial, tiene una tradición aristocrática, y hasta la fecha recluta oficiales de la clase alta.

Aunque las diferencias de proveniencia social de los oficiales de los cuatro sectores de las fuerzas armadas chilenas no sean muy agudas (esencialmente todos vienen de la clase media), pueden ser lo suficientemente significativas para producir variaciones en actitudes sociales y políticas fundamentales, en especial si también existen diferencias paralelas en patrones matrimoniales y en relaciones sociales con civiles. Probablemente no sea una mera coincidencia el hecho de que Allende encontrara muy poco apoyo entre los oficiales de la marina y de la fuerza aérea, aunque la clase social como único elemento no puede proporcionar una explicación completa.

Con la mayor tensión política, los conflictos sociales y el caos económico, en especial después de la "huelga de jefes" de octubre de 1972, tanto la Unidad Popular como la oposición empezaron a darse cuenta de que la lucha que se estaba llevando a cabo en Chile era una guerra de clases.³¹ En tal situación, se agudizó el conflicto dentro del cuerpo oficial entre la orientación social y política fundamental (que desde luego correspondía a la orientación predominante de su clase de origen y de sus relaciones sociales), y las normas profesionales de no intervención. Así, la estrategia de la Unidad Popular de apoyarse en el constitucionalismo de las fuerzas armadas se volvió más problemática, al intentar neutralizar y/o ganarse al cuerpo oficial para dismantelar el sistema capitalista.

Decir que el golpe del 11 de septiembre fue inevitable, debido a la naturaleza de clase del cuerpo oficial, sin embargo, desatiende precisamente la agudeza del conflicto que ocurrió dentro de las fuerzas armadas. Las normas profesionales de no intervención estaban fuertemente arraigadas, y a pesar de la importancia de las relaciones de clases sociales que describimos, la mayor parte de los oficiales estaban casi todo el tiempo con otros oficiales y/o reclutas. Entre los 37 generales retirados que estudió Hansen, eran muchas más las amistades con otros oficiales que con civiles. Cuando se les pidió que nombraran la ocupación de su cinco mejores amigos durante sus últimos años de servicio activo, mencionaron a 192 colegas oficiales y sólo a 36 civiles.³² Mientras que el patrón de amistades indica un aislamiento relativo de contacto social con civiles, no implica aislamiento del ambiente ideológico general, o de uno en particular: los oficiales no estaban limitados en su selección de lecturas, pero hasta los años sesenta sólo *El Mercurio* —el periódico que enun- ciaba la posición de la élite industrial y terrateniente de Chile— se podía conseguir en los clubes de oficiales. Después se recibió también *La Tercera*, periódico radical democrático, que popularmente se conocía como el "*Mercurio menor*". Sin embargo, el patrón de amistades implicó la

relativa cerrazón de los oficiales dentro de un tipo particular de institución con sus propias tradiciones y normas y, por lo tanto, también la posibilidad de mantener una distancia entre una cultura profesional exclusiva y los conflictos sociales civiles.

Además, en el transcurso de su carrera los oficiales experimentaron contradicciones significativas que atenuaron la lealtad a la clase social. En el ejército, las primeras asignaciones en la provincia

ponían a los oficiales jóvenes en relación social íntima y continua con miembros de la clase baja. ...Con frecuencia los conscriptos que los consideraban como patrón o padre, y se desarrollaron fuertes ligas interpersonales. El joven oficial se daba cuenta de que en muchos casos *los nuevos conscriptos habían sido maltratados*. Muchos estaban *desnutridos, desarreglados y enfermos*. *La mayoría tenía poca instrucción*... El contacto con conscriptos y otro personal de la clase baja continuaba a lo largo de la carrera, aunque en general cada vez sobre una base menos íntima y directa.³⁴

Tales experiencias, desde luego, no producían más que un sentimiento de superioridad y de desprecio por las clases bajas en el oficial. Sin embargo, en el contexto del subdesarrollo, combinado con las mayores diferencias políticas en lo que se refiere a los problemas de "modernización" y reforma, también podían llevar al cuestionamiento de un sistema que reclutó para el ejército a gente de la que no se podía esperar que funcionara bien como soldados.

La participación militar en programas de desarrollo nacional también puso a los oficiales del ejército en contacto directo con problemas de crecimiento económico, entrenamiento de empleados, problemas sociales, etcétera. Por lo menos una minoría importante se oponía a ellos, sobre la base de su incompatibilidad con las funciones únicas de defensa de los militares. Sin embargo, la mayoría de los generales retirados, que Hansen entrevistó, se expresaron a favor de aumentar la participación del ejército en los programas de desarrollo nacional, y casi la mitad de éstos podrían considerarse como políticamente progresistas.³⁵

Por lo tanto, las contradicciones tanto como las divisiones reales y potenciales dentro del ejército eran significativas. Una situación similar existía aparentemente entre los carabineros, cuyos oficiales también estaban en contacto constante con los problemas cotidianos de los sectores más pobres de la población, generalmente como una de sus funciones represivas. La fuerza aérea y la marina experimentaron menos conflictos internos, debido a su mayor aislamiento de los problemas económicos y sociales del país. (El cuerpo oficial de la marina, en particular, estaba casi completamente unido en su oposición a la Unidad Popular).

Así, el impacto acumulado de una serie de diferencias menores de origen social, relaciones sociales con civiles y experiencias de carrera, aparentemente creó diferencias importantes en las actitudes sociopolíticas

del cuerpo oficial en los cuatro sectores de las fuerzas armadas y dentro de cada sector.³⁶ Los dirigentes de la Unidad Popular estaban conscientes de tales diferencias, como también lo estaban los mismos oficiales. La estrategia de la Unidad Popular de intentar neutralizar y/o ganarse al cuerpo oficial, entonces, no sólo se basaba en confiarse del constitucionalismo de las fuerzas armadas, sino también en un análisis del des-acuerdo actual y potencial dentro y entre ellas.

Preparación de los militares y la ayuda militar de los Estados Unidos

Hay ciertas discrepancias en los datos que se refieren al tamaño de las fuerzas armadas chilenas, que pueden ser resultado de las diferencias en los años usados como base. Según dos informes publicados en 1967 y 1968, el número total de personas y oficiales integrados al ejército, la marina y la fuerza aérea era de 46 000. Según otros dos informes publicados en 1967 y 1973 el total de los tres sectores era de 60 000.³⁷ La fuerza de los carabineros varía según los informes entre 24 000 y 30 000.³⁸ Ya sea que se considere la cifra de 46 000 o de 60 000 como la correcta, la proporción de personal militar con la población total de Chile está entre las más altas de América Latina, en segundo o tercer lugar después de Cuba.³⁹ Si se incluye a los carabineros en el cálculo, Chile definitivamente queda en segundo lugar.⁴⁰ Dado el entrenamiento profesional y la organización de los militares, tanto como el nivel de armamento de esta fuerza policiaca nacional, hay bases legítimas para incluirla, aunque debe tenerse en cuenta que una parte del personal de los carabineros participa en actividades del tipo de control de tránsito. No importa cuáles sean las cifras y proporciones correctas, se sabe que el nivel de fuerza militar es relativamente alto, especialmente si se considera el hecho de que Chile (al contrario de Cuba) no se ha enfrentado en los últimos tiempos con la amenaza de intervención extranjera, ni tampoco (al contrario de sus vecinos del continente) con un problema interno de guerrillas.

Además de la relativamente gran fuerza nacional, las instituciones militares de Chile están bien organizadas, entrenadas y disciplinadas. Tales instituciones, por ejemplo, no podrían compararse con las fuerzas armadas corruptas, desorganizadas y desmoralizadas de la Cuba de Batista.⁴¹ Y a pesar de las quejas institucionales de los oficiales del ejército, las organizaciones militares en general estaban bastante bien equipadas, tenían un fuerte poder contrainsurgente y un alto grado de movilidad. Por ejemplo, la fuerza aérea está bien equipada con transportes para material y para tropas y su escuadrón ligero de bombardeo de Invasores B-26 es especialmente apropiado para bombardeos apretados a niveles bajos, en áreas urbanas si es necesario.⁴²

El alto nivel de entrenamiento y equipo fue mantenido en gran parte por el Programa de Ayuda Militar de los Estados Unidos (MAP). En

1952, Chile firmó un pacto bilateral de ayuda de defensa mutua con los Estados Unidos, por el cual fue aceptado para participar en el programa MAP bajo el Decreto de Seguridad Mutua de 1951.⁴³ Hasta la Revolución Cubana, el programa MAP, dentro de la lógica de la guerra fría, se "hizo disponible para la modernización de los ejércitos latinoamericanos para fortalecer las defensas del hemisferio contra la agresión externa."⁴⁴ Con la revisión de la estrategia militar de los Estados Unidos después de la victoria de Castro y de la radicalización del gobierno revolucionario cubano, "fondos para entrenamiento y equipo contrainsurgente se hicieron disponibles para los ejércitos latinoamericanos por primera vez en... 1963."⁴⁵ Así, en 1968 por ejemplo, el 76% de la ayuda militar de la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos solicitada para América Latina se gastó "en equipo y servicios relacionados con la contrainsurgencia."⁴⁶ Entre 1953 y 1966 Chile, un país pacífico, estuvo en "segundo lugar después de Brasil entre los países latinoamericanos como recipiente de ayuda militar de los Estados Unidos... tanto en subvenciones militares como en la entrega de material excedente."⁴⁷ Y según la base per cápita, Chile recibe más ayuda militar de los Estados Unidos que ningún otro país latinoamericano. Durante el mismo período, la ayuda aumentó a 9.7% del total de los gastos para la defensa.⁴⁸ Después de 1963, aunque faltan datos precisos, se puede suponer que la mayor parte de esta ayuda, de acuerdo con el patrón general de ayuda militar para América Latina, se dirigía a aumentar el potencial contrainsurgente de las fuerzas armadas chilenas.

Los Estados Unidos también han hecho grandes inversiones en el entrenamiento del personal militar chileno, especialmente de oficiales.⁴⁹ Entre 1950 y 1968, 2 064 chilenos fueron entrenados en las bases militares de los Estados Unidos y 549 en la del Canal de Panamá,⁵⁰ y durante los años sesenta, ese país mantuvo un promedio anual de 48 militares en Chile.⁵¹ Dentro de la línea de la estrategia militar de los Estados Unidos después de la Revolución Cubana, "los programas de entrenamiento estaban diseñados... para enfatizar la importancia de las operaciones contra-guerrilleras."⁵²

Había variaciones en la cantidad de ayuda y entrenamiento de los Estados Unidos, según los diferentes sectores de las fuerzas armadas. Durante un período de cinco años en la década de los sesenta, los más favorecidos eran la marina y la fuerza aérea.⁵³ Entre 1959 y 1969, el porcentaje anual promedio del total de personal de las fuerzas armadas que estaba programado para entrenarse en las bases de los Estados Unidos era de .3 para el ejército, 1.1 para la marina y 1.4 para la fuerza aérea.⁵⁴ Aunque "durante los años sesenta el entrenamiento del ejército chileno por los Estados Unidos era proporcionalmente uno de los menores en América Latina", y bastante menor que el entrenamiento de la fuerza aérea y de la marina, el ejército chileno se benefició con la presencia de un gran número de Grupos Móviles de Entrenamiento de los

Estados Unidos (MTT). De hecho, de 1961 a 1967 "el nivel de los MTT fue considerablemente más alto en comparación con el resto de Latinoamérica, que el nivel de entrenamiento directo."⁵⁶ Además, el número de personal programado para entrenarse en los Estados Unidos aumentó mucho en 1968 y, aunque disminuyó un poco en 1969, la cifra de ese año fue mayor que el nivel de 1959 a 1967.⁵⁷

¿Qué significan estas tendencias en el entrenamiento y la ayuda de los Estados Unidos? Durante la década 1959-1969 aparentemente la fuerza aérea y la marina fueron los que obtuvieron mayor y más continua ayuda y entrenamiento de los Estados Unidos. Puesto que éste era el caso, la antipatía ya definida contra la Unidad Popular, tanto como las actitudes reaccionarias de los oficiales de la marina en particular y de algunos oficiales de la fuerza aérea, fácilmente podrían haber sido fortalecidos con mayor interacción con los militares de los Estados Unidos.⁵⁸ El gran aumento del entrenamiento del personal del ejército durante 1968 y 1969, que incluyó la compra de helicópteros,⁵⁹ muy probablemente se basaba en un cálculo político por parte de los consejeros militares de los Estados Unidos y de los oficiales chilenos. Ya para 1968 parecía claro que las elecciones presidenciales de 1970 podrían producir un triunfo de la izquierda, dado el conflicto cada vez mayor entre el Partido Nacional y la Democracia Cristiana, y la consecuente improbabilidad de que se unieran en apoyo a un mismo candidato. Después de todo, serían el ejército y los carabineros quienes tendrían que controlar un levantamiento popular. Por ello, los Estados Unidos también ayudaron a preparar a los carabineros. Durante los años sesenta, proporcionaron cantidades considerables de ayuda a esta fuerza policiaca militarizada, que recibió 2.4 millones de dólares entre 1961 y 1970 a través del Programa de Seguridad Pública.⁶⁰ Los carabineros, desde luego, habían sido el instrumento más importante de represión interna desde 1920.

El nivel de preparación bastante impresionante de las fuerzas armadas chilenas ha llevado a varios observadores a decir que los gobiernos híbridos de clase media y élite de Chile de las últimas décadas han mantenido un aparato militar particularmente grande, bien equipado y bien entrenado, como la última línea de defensa contra una amenaza de revolución basada en el mayor poder electoral y organizativo de la clase obrera. El mismo razonamiento, dicen, está tras la política de los Estados Unidos.⁶¹ Es indudable la validez de estos argumentos frente a los Estados Unidos. Sin embargo, es más problemático aplicarlos a los gobiernos de Chile posteriores a la segunda guerra mundial.

Desde luego, la clase media y la élite, esperaban que las fuerzas armadas las defendieran en el caso de una amenaza de revolución. Pero aparentemente se sentían lo bastante seguras en su capacidad de controlar el proceso político y al Estado para reducir los gastos militares y para no responder a las quejas institucionales sobre salarios y equipo especialmente por parte del ejército. En lo que se refiere a fuerza, desde

los años cuarenta “el crecimiento a largo plazo del cuerpo militar ni siquiera se ha mantenido al paso del de la población general.”⁶² la parte que corresponde a la defensa (ejército, marina y fuerza aérea) del presupuesto nacional disminuyó de 18% en 1948 a 9% en 1968.⁶³ Joxe presenta el siguiente cuadro de gastos militares durante cinco años, que incluye cuatro años del gobierno conservador de Alessandri y uno del gobierno demócrata cristiano de Frei.

Gastos militares 1961-1965 (base 100: 1961)⁶⁴

	1961	1962	1963	1964	1965
Policía y carabineros	100	103.7	90.4	90.6	109.2
Defensa (total)	100	97.3	89.0	87.4	97.8
Ejército	100	96.3	83.0	82.1	82.9
Marina	100	98.5	97.1	92.3	107.1
Fuerza aérea	100	96.3	79.2	84.2	99.3

Aunque los gastos militares como parte del presupuesto nacional siguieron disminuyendo, dado el rápido aumento de gastos del Estado (especialmente durante el gobierno demócrata cristiano), Frei, por lo menos durante el primer año de gobierno, aumentó significativamente la cantidad absoluta para gastos militares. Los carabineros y la policía fueron particularmente favorecidos, mientras que el ejército no tanto. Durante el último año de su gobierno, Frei de hecho se enfrentó con un motín del ejército en protesta por los salarios. En mayo de 1973, Joxé todavía insistía en que la evolución del presupuesto militar antes de 1970 “no había contribuido en absoluto en alinear por lo menos al ejército en las fuerzas de la derecha tradicional.”⁶⁵

La Unidad Popular, así, se enfrentaba con fuerzas armadas muy profesionales con una capacidad impresionante para la represión interna. Su formación ideológica fue muy influida durante los años sesenta por el entrenamiento contrainsurgente de los Estados Unidos. En general, tal entrenamiento sin duda reforzó las actitudes anticomunista y antisocialista dentro del cuerpo oficial. Sin embargo, también era fuerte la tradición constitucionalista; la mayoría de los oficiales, así como la población civil, creía y se enorgullecía de la historia democrática de Chile, ejemplar en Latinoamérica. Además, estaban insatisfechos con la manera en que tanto el gobierno conservador de Alessandri como el demócrata cristiano de Frei habían tratado los problemas internos de las instituciones militares y los problemas sociales y económicos del país.⁶⁶

La estrategia de la Unidad Popular frente a las fuerzas armadas, en teoría

Resumiendo la información presentada arriba, es posible identificar los factores que permitieron a los estrategas de la Unidad Popular creer que se podía evitar una intervención militar de derecha. Éstos eran:

- (1) las normas profesionales constitucionalistas de la mayor parte del cuerpo oficial (repetiendo, esto no quiere decir que los oficiales fueran apolíticos, sino que históricamente habían tendido a subordinar —y tal vez lo seguirían haciendo— sus predilecciones políticas a los principios de constitucionalismo y no intervención);
- (2) la presencia de oficiales nacionalistas y progresistas, especialmente dentro del ejército, y por lo tanto la dificultad de organizar un golpe de derecha sin precipitar un rompimiento en las fuerzas armadas;
- (3) la posibilidad de usar la satisfacción de exigencias institucionales como táctica para reducir las presiones para una intervención.

¿Cuáles eran los factores que operaban contra aquella posibilidad?

- (1) las relaciones sociales de la clase media y las actitudes fundamentalmente conservadoras o del centro de la mayoría de los oficiales, que habían surgido históricamente por los agudos conflictos sociales y económicos;
- (2) las implicaciones ideológicas del entrenamiento y la educación profesional militar que enfatizan el orden, la jerarquía y la autoridad;
- (3) la presencia de elementos claramente reaccionarios en el cuerpo oficial;
- (4) la influencia ideológica del entrenamiento de los Estados Unidos y la asociación continua de los oficiales chilenos con los norteamericanos.

En lo que se refiere al análisis político general de los militares, Allende y sus consejeros también estaban convencidos (y creo que correctamente) de que cualquier intento por parte del gobierno para organizar milicias armadas de obreros y campesinos, o cualquier otro paso fuera de los límites de la legalidad, habrían abierto el camino a los reaccionarios del cuerpo oficial. Debe señalarse que los oficiales progresistas que apoyaban a Allende y cooperaban con él también eran constitucionalistas, y sólo podían influir para que los oficiales que no simpatizaban con el gobierno de la Unidad Popular fueran neutrales sobre la base de *argumentos legales y profesionales*. Este hecho implicaba otra cosa: cualquier interferencia anormal del Ejecutivo en los patrones de asignatura

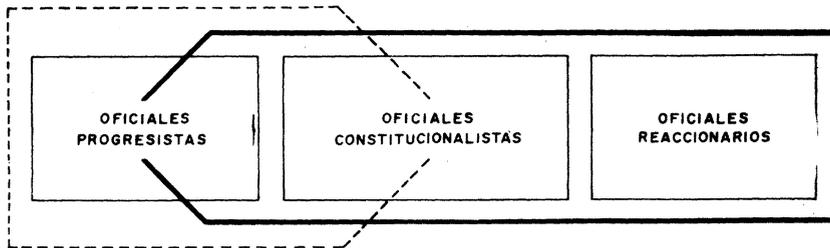
y promoción militar también redundaría en beneficio de los reaccionarios, ya que tales interferencias podrían fácilmente considerarse un asalto a la integridad profesional de los militares. (Dentro de la rutina normalmente aceptada, Allende podía influir relativamente sobre las promociones; los generales eran nombrados por el presidente y "así", la responsabilidad política era un criterio importante (y aceptado) en este nivel." 67)

El respeto por la legalidad del sistema existente y por la autonomía interna de las instituciones militares era considerado fundamental, pero no eran necesariamente condiciones suficientes para mantener la lealtad de las fuerzas armadas. También se requería el orden público y un poco de estabilidad económica, dado que la estrategia frente a los militares era una parte de la estrategia usada con la clase media. No se podía esperar que el cuerpo oficial reprimiera una protesta de la clase media (no importa la forma de expresión que adoptara) durante un período largo. Y tampoco se podía esperar que la clase media y el cuerpo oficial soportaran fácilmente una prolongada crisis económica o repetidos disturbios del orden público a través de confiscaciones ilegales de tierras o fábricas, o de manifestaciones multitudinarias en favor de la destrucción del orden legal existente. Por lo tanto, existía la necesidad de una movilización masiva ordenada y controlada, y de desaprobación de la espontaneidad.⁶⁸ Así, entre las razones para no alentar la movilización de organizaciones populares, que espontáneamente surgió como respuesta a la "huelga de jefes" de octubre de 1972, estaba la presión militar.

El control de la movilización de masas, por lo cual se ha criticado mucho a la Unidad Popular por los izquierdistas, formaba una parte integral de la estrategia. Era parte del intento de retener el apoyo de los oficiales progresistas, mayoría constitucionalista profesional, y de aislar a la derecha intervencionista. La Unidad Popular quería evitar comprometerse en ninguna acción que hiciera cambiar a la mayoría del cuerpo oficial constitucionalista hacia la derecha reaccionaria. Al contrario, el gobierno de Allende esperaba ser capaz de mantener la lealtad de los constitucionalistas en caso de que oficiales o dirigentes políticos reaccionarios instigaran la acción violenta o ilegal.

El análisis que la Unidad Popular hizo de la situación general en las fuerzas armadas puede ser representado pictóricamente de la siguiente manera. En el diagrama, los rectángulos que representan a los oficiales progresistas, constitucionalistas y reaccionarios no necesariamente corresponden con el tamaño real de esos grupos; los datos de ese tipo sencillamente no se pueden obtener. Desde luego, también hay grandes diferencias en la proporción de oficiales en los tres grupos según cada sector de las fuerzas armadas.

EL CUERPO DE OFICIALES



- Probable línea de división si la Unidad Popular precipitara una acción inconstitucional, es decir, la unión del cuerpo oficial con la oposición política para derrocar a Allende.
- Probable línea de división si los oficiales reaccionarios intentaran un golpe, es decir, un estancamiento o un rompimiento que llevaría a la guerra civil.⁶⁹

En términos generales, creo que el análisis era válido. Requería en gran medida flexibilidad y determinación para implementarlo, y un ajuste rápido para responder a la situación económica, política y social que se estaban deteriorando, en especial después del intento de golpe del 29 de junio. Desafortunadamente, la política de la Unidad Popular manifestaba cierta “inflexibilidad” y una seria falta de determinación.

La política de la Unidad Popular frente a las fuerzas armadas en la práctica

El análisis de los militares hecho por los estrategas de la Unidad Popular y por Allende los llevó a tratar de satisfacer las exigencias institucionales de las fuerzas armadas (inclusive el mantener ligas estrechas con la institución militar de los Estados Unidos), a respetar las promociones internas y los patrones de asignaturas, y a integrar las fuerzas armadas (especialmente el ejército) no sólo en algunos proyectos para el desarrollo nacional, sino también en el funcionamiento diario de sectores vitales de la administración pública y de la economía.

El gobierno de la Unidad Popular aprobó aumentos de salarios para las fuerzas armadas, de los que los mayores fueron para los rangos más bajos y para los medianos. Las fuerzas armadas también se beneficiaron de nuevas viviendas para militares y la adquisición de equipo nuevo; los oficiales de más alto rango pudieron adquirir automóviles especialmente importados para ellos.⁷⁰ Los datos sobre gastos militares bajo el gobierno de Allende no se pueden conseguir. Sin embargo, no cabe duda de que

umentaron. Además, las fuerzas armadas chilenas siguieron recibiendo subvención, equipo y entrenamiento de los Estados Unidos. De hecho, la ayuda militar fue la única que dieron los Estados Unidos a Chile durante la presidencia de Allende. En 1971, por ejemplo, los Estados Unidos donaron cinco millones de dólares a la fuerza aérea para la adquisición de aviones de carga y equipo de paracaidistas.⁷¹ Los Estados Unidos también siguieron participando en varias maniobras junto con las fuerzas armadas chilenas y asistía a sus celebraciones. La política de aumentar las fuerzas armadas, desde luego implicaba serios riesgos ya que la mayor fuerza podría ser utilizada para destruir el gobierno de la Unidad Popular, tanto como para sostenerlo.

Aunque respetaba los reglamentos formales respecto de las promociones, Allende, a principios de 1972, tenía "generales seguros" al mando de todos los sectores militares.⁷² Joxe los describe como "en favor de la Unidad Popular, o más bien de la alianza de clases que intenta restaurar una función esencial para la burguesía no monopólica."⁷³ El significado y las implicaciones de esa caracterización de los "generales seguros" no están enteramente claros en el análisis de Joxe; de hecho, algunos apoyaron el golpe del 11 de septiembre, mientras que otros se opusieron.

Finalmente, el gobierno de la Unidad Popular integró a los miembros de las fuerzas armadas en el planeamiento y la administración de los sectores clave de la economía.

Por primera vez en la historia de Chile, representantes de los militares participaron directamente en la producción de bienes y servicios. El general de brigada Pedro Palacios Camerón fue nombrado (diciembre de 1970) director de la Chuquicamata Copper Company, y representantes del ejército, la marina y la fuerza aérea estaban en los consejos nacionales de producción de las compañías de cobre, hierro y nitrato. Los representantes militares formaban parte del Odeplan, la Organización Nacional de Planeación, que tenía una posición equivalente a la del gabinete. Además, la Unidad Popular . . . incluía a los militares en sus actividades de desarrollo en las cuatro provincias del sur: Cautín, Malleco, Valdivia y Osorno. Los militares participaron en el programa de distribución de "medio litro de leche"; en la planeación del III Congreso sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en Santiago en abril de 1972; y en el órgano gubernamental que era responsable de desarrollar el deporte en el país.⁷⁴

El recuento de la participación de los militares en la administración económica podría ser mucho más extenso.

¿Cuáles fueron las consecuencias de esa política? Existe poca información precisa. Sin embargo, algunos observadores han dicho que en general tuvo un efecto positivo sobre el apoyo de las fuerzas armadas para la Unidad Popular. Los oficiales involucrados en el programa para distribución de alimentos, por ejemplo, tomaron conciencia de la manera

en que el mercado negro entre la clase media y los políticos de derecha saboteaban la economía. En un caso excepcional, un joven oficial que había participado en los programas de economía del gobierno, renunció al ejército para poder ayudar mejor a lograr las metas de la Unidad Popular mediante la organización de los cordones industriales.⁷⁵ Sin embargo, los efectos generales de la política de integrar a los oficiales en la economía y la administración pública eran contradictorios. Naturalmente algunos oficiales progresistas que favorecían la expansión de programas de acción civil para militares respondieron de manera positiva; pero los oficiales que inexorablemente se oponían a la expansión de participación militar fuera de estrechos límites muy bien definidos no faltaban ni siquiera en el ejército. Su reacción fue altamente negativa. En particular, “las historias sobre oficiales del ejército que participaban activamente en el movimiento de movilización de masas”, se consideraban “como un intento del ala de extrema izquierda del gobierno de Allende de violar seriamente... las normas profesionales.”⁷⁶ La ansiedad en lo que se refiere a la capacidad y el compromiso del gobierno de la Unidad Popular de mantener la integridad profesional de las fuerzas armadas afectó incluso a los “oficiales neutrales o hasta a los partidarios de Allende.”⁷⁷ Además, la participación de los oficiales en la administración pública y en la economía no sólo les permitió darse cuenta de las consecuencias negativas del mercado negro; también los puso en contacto inmediato con la “ineptitud e ineficacia administrativa”⁷⁸ del gobierno. Finalmente, debe preguntarse si no fueron principalmente los oficiales progresistas los que participaron en los programas de desarrollo nacional, mientras los oficiales neutrales o de oposición quedaron al mando de las tropas.

No obstante que los efectos sobre los oficiales hayan sido de mayor apoyo o de retiro de apoyo al gobierno de Allende, es seguro que la política de incorporación permitía a los militares controlar, aunque fuera parcialmente, las empresas y actividades importantes, y les proporcionó la experiencia que facilitaría la futura institución de un gobierno militar. Así, esta política resultó de doble filo.

La penetración militar en el aparato de Estado tomó también otras formas no previstas en la estrategia original. Cuando los conflictos entre la Unidad Popular y varios grupos de oposición alcanzaron proporciones críticas, con violencia en varias provincias (por ejemplo, el problema de la reforma agraria), aquellas provincias fueron declaradas “zonas de emergencia”.⁷⁹ Según las leyes chilenas, una zona de emergencia era virtualmente una dictadura militar en pequeño: el militar al mando de la región asumía todas las funciones políticas normalmente de civiles y podía nombrar personal militar para manejar los sectores críticos de la administración local. A medida que aumentaba el número y la duración de las zonas de emergencia durante la presidencia de Allende, más oficiales tenían que enfrentarse con todos los problemas y conflictos políti-

cos, sociales y económicos y manejarlos en su zona de operación. En esas zonas el cambio a poder militar era, pues, "cualitativamente similar a un golpe;"⁸⁰ los militares podían utilizar todos los medios necesarios para mantener el orden público.

Además, aunque el presidente podía escoger a los oficiales que debían ser asignados a las industrias nacionalizadas, organismos de planeación, etcétera, los comandantes de las unidades militares en determinadas provincias eran designados por los militares y el control del ejecutivo sobre su modo de funcionamiento estaba estrictamente limitado. Así, en muchas regiones los militares se hicieron cada día más autónomos en el ejercicio del poder. Debe recordarse también que los oficiales tenían mucho contacto (a través de matrimonio, etcétera) con miembros de la clase alta rural terrateniente en las provincias del sur y con la clase media profesionalista y comerciante en el norte y en Santiago. A medida que los terratenientes en especial —y menos los comerciantes y profesionistas— se sentían más amenazados por las medidas reformistas de la Unidad Popular, el hecho de trabajar dentro de los límites y el espíritu de la política de la Unidad Popular necesariamente se volvió un problema cada vez mayor para un gran número de oficiales; de hecho, comenzaron a actuar contradiciendo más y más esa política, en especial en el sur, donde la represión después del golpe fue particularmente dura.⁸¹

Además de la presencia de los militares en la burocracia nacional y en las zonas de emergencia, después de la "huelga de jefes" de octubre de 1972, entraron también en el gabinete. De hecho, "la clave . . . que puso fin a la huelga . . . que puso al país al borde de una parálisis fue la designación . . . de oficiales importantes de los tres sectores de las fuerzas armadas al gabinete."⁸² Los oficiales, aunque no los mismos en todos los ministerios, permanecieron en el gabinete hasta las elecciones parlamentarias de marzo. Reingresaron al gabinete en agosto a raíz de la segunda huelga de clase media y empresarios que comenzó con los camioneros el 26 de julio.

Así, en septiembre de 1973 el gobierno de Allende era ya virtualmente cautivo de las fuerzas armadas que habían estado involucradas en todos los niveles en la crisis del país: como administradores de empresas, como burócratas de la administración nacional y como dirigentes políticos en las zonas de emergencia y en el gabinete. En septiembre, también, los problemas políticos dentro del cuerpo oficial habían sido ya francos desde hacía meses, y las divisiones eran profundas. Allende y los dirigentes de la Unidad Popular todavía calculaban que sería posible un rompimiento dentro de las fuerzas armadas en caso de que se intentara un golpe de derecha. Esperaban el apoyo en especial de los oficiales del ejército y de los carabineros.

La estrategia de la oposición frente a las fuerzas armadas y la ruptura de la mayoría constitucionalista

La extrema derecha había intentado provocar un golpe militar desde que Allende fue elegido. Antes del inicio de la presidencia de Allende, elementos de la extrema derecha secuestraron y, por un disparate, asesinaron al comandante en jefe del ejército, general René Schneider, esperando que se culpara a la izquierda del ataque y que el cuerpo oficial se uniera para evitar el ascenso al poder de Allende. A pesar de la participación de los comandantes en jefe de la marina y la fuerza aérea, del comandante de la división de Santiago del ejército, y del director de los carabineros en aquel plan, falló. Aunque la fuerte inclinación personal constitucionalista de Schneider, conocida como la "Doctrina Schneider", era importante para desalentar la conspiración, su posición no hubiera evitado una extensión del plan si la mayoría de los oficiales no lo hubieran compartido.⁸³ Las condiciones para un golpe de derecha con éxito no existían aún dentro de las fuerzas armadas, ni tampoco entre los políticos civiles. Según los objetivos de la derecha, el asesinato resultó contraproducente. Por lo menos, por el momento, consolidó la resolución de la mayor parte del cuerpo oficial de respetar el mandato de la elección, ya que los investigadores militares averiguaron la culpabilidad de la extrema derecha. También permitió al gobierno eliminar a algunos reaccionarios militantes del cuerpo oficial, aunque desde luego no a todos. Se descubrieron además otras conspiraciones durante la presidencia de Allende.

Con el fracaso de los primeros intentos de provocar un golpe, la oposición a la Unidad Popular se acercó a todas las formas de obstruccionismo legal y parlamentario para evitar la implementación del programa de la Unidad Popular. También intentó la organización sistemática de un caos económico —tarea en la que colaboraron los Estados Unidos— para preparar el terreno para un golpe próximo. La "huelga de jefes" de octubre de 1972 tenía como objetivo principal el derrocamiento del gobierno. Sin embargo, cuando ingresaron los militares al gabinete, las tácticas de oposición disminuyeron, ya que tanto el Partido Nacional como el Demócrata Cristiano se empezaron a preparar para las elecciones parlamentarias de marzo. Esperaban obtener una mayoría de dos tercios, con lo cual hubieran podido desaforar a Allende. Pero al contrario, la Unidad Popular logró obtener más lugares en el Congreso, con un voto popular (a pesar de la situación económica tan difícil) de 44 por ciento, que significaba un aumento de aproximadamente 8% sobre el voto de 1970 en favor de Allende. Con la posibilidad de derrocar el gobierno eliminado electoralmente, la oposición intentó otra vez tácticas que podían provocar un golpe, de las que las huelgas que comenzaron el 26 de julio fueron el último y más exitoso acto.

Anterior a este último ataque a la Unidad Popular, un golpe prematuro tuvo lugar el 29 de junio. Era prematuro en el sentido de que los organizadores de derecha de las fuerzas armadas no estaban completamente preparados; no tenían el apoyo suficiente de oficiales del sector constitucionalista que disminuía y además vacilaba en cuanto a su posición. Además, y tal vez aún más importante, los que apoyaban a Allende ocupaban las posiciones clave en la jerarquía militar, especialmente en Santiago. El más importante y respetado era el general Carlos Prats, comandante en jefe del ejército. Sin embargo, en esa época el cuerpo oficial cada vez se prestaba más a apoyar un golpe de derecha, o por lo menos no se opondría a él.

Los cambios de actitud que se daban en el cuerpo oficial estaban fundamentalmente relacionados con la intensificación general de los conflictos de clase después de las elecciones de marzo. Se había llegado totalmente a un punto muerto. Dentro del sistema parlamentario existente, la Unidad Popular no podía implementar ni racionalizar sus reformas sociales y económicas sin el apoyo de los ajenos a la Unidad Popular. La oposición no podía legalmente quitar al Presidente, pero podía seguir manteniendo la situación caótica en la que la polarización de clases se agudizaría a medida que la economía, ya en estado crítico durante más de un año, se siguiera deteriorando. Además, las reformas de la Unidad Popular en proceso de implementación o de discusión amenazaban seriamente la posición social y económica de los sectores de pequeño burgueses: las cooperativas de compra-venta agrícola implicaban necesariamente la eliminación de intermediarios, ya fueran operaciones mercantiles pequeñas, medianas o grandes; una corporación camionera estatal implicaba la eliminación de un gran número de negociantes privados. Los sectores de la clase media que habían sido afectados por las reformas de la Unidad Popular fácilmente se podían convencer de que lo estarían en el futuro próximo. En la lógica de este proceso el partido demócrata cristiano reforzó su oposición, ya que era la organización política más importante de la clase media y que desde 1972 había intentado organizar una "desobediencia civil". Así, hacia mayo y junio de 1973 no sólo los terratenientes y la burguesía sino también la mayor parte de la clase media ni apoyaba al gobierno ni era neutral; estaba en oposición estridente. Esto, desde luego, tuvo un impacto profundo sobre el cuerpo oficial.

Además de la intensificación de los conflictos de clases, el cuerpo oficial estaba especialmente agitado por dos fenómenos que no eran intrínsecos al conflicto social básico, aunque sí eran manifestaciones de él. El primero era las proposiciones de reforma educativa que planteaba la Unidad Popular, que también provocó descontento en la clase media. El otro era el MIR y la proselitización socialista izquierdista entre los soldados, que afectaba específicamente a las instituciones militares. La reforma educativa se caracterizaba, por la oposición, como un acto totalitario para controlar la mente de sus hijos; el texto de la proposición,

con su compromiso explícito de crear un hombre nuevo, alimentó e inflamó los temores de la clase media y la alta, y con ellas del cuerpo oficial. La prensa de la oposición (especialmente en *El Mercurio*) organizó una verdadera guerra de propaganda contra el gobierno de la Unidad Popular sobre esta cuestión. Sin embargo fueron los intentos de izquierdistas de penetrar las fuerzas armadas los que produjeron en los oficiales reacciones que “iban desde una gran inquietud hasta una gran furia, si no directamente temor.”⁸⁵ No sólo el MIR sino también los socialistas izquierdistas —que formaban parte de la coalición de la Unidad Popular— fueron considerados por los militares los responsables de la proselitización entre los conscriptos; por extensión también el presidente fue considerado responsable. En suma, los oficiales se convencían de que Allende no quería o no podía mantener la integridad profesional de las fuerzas armadas, y de que no podía controlar el proceso político, social y económico del momento.

Un golpe reaccionario; ¿era inevitable?

A pesar de la posición ya débil del gobierno dentro del cuerpo oficial cuando se llegó el golpe del 29 de junio, su fracaso creó una situación en la que la Unidad Popular tenía posibilidad de adoptar una actitud ofensiva que o bien hubiera preservado y solidificado el gobierno o hubiera provocado una ruptura dentro de las fuerzas armadas que hubieran llevado a una guerra civil; pero no habría provocado la masacre de la izquierda que ocurrió. Los oficiales de alto rango dentro del grupo progresista opinaban que el momento era el apropiado para purgar a las instituciones militares de los elementos activos de derecha. Además, el golpe intentado había provocado el resurgimiento de la movilización y la organización popular. El pueblo que apoyaba la Unidad Popular exigía, y quería apoyar, una acción de fuerza por parte del Presidente. Los oficiales progresistas, por otra parte, aceptaban el apoyo de los sindicatos: aunque no existía concretamente una *organización* militar de trabajadores, de hecho, para junio muchos ya estaban armados.⁸⁶

Los organizadores del golpe del 11 de septiembre han admitido que la situación después del levantamiento del 29 de junio fue crítica para ellos.⁸⁷ Cuando ocurrió el intento de golpe, cientos de oficiales manifestaron su voluntad de apoyar al gobierno. Y dentro del análisis estratégico que hizo la Unidad Popular de la política militar la purga hubiera podido llevarse a cabo; es decir que el intento de golpe era un acto ilegal e inconstitucional por parte de la derecha y, por lo tanto, daba lugar a una acción ofensiva.

Lo que sucedió después del levantamiento del 29 de junio y las razones para que no se hiciera la purga no son enteramente claras. Un factor seguro fue la actitud cauta de Allende en la política y su profundo temor de una guerra civil. Aparentemente, durante algún tiempo antes del 29

de junio, Allende y sus consejeros habían considerado la necesidad de desarrollar estructuras que hubieran permitido a los oficiales leales coordinar sus acciones con organizaciones obreras. Sin embargo, esto requería una unidad táctica que no existía en la Unidad Popular.⁸⁸ Los izquierdistas de la coalición, en particular, desconfiaban de los oficiales y pedían más bien el apoyo de obreros armados. Así, la falta de estructuras para una acción coordinada que hubiera canalizado un apoyo directo y efectivo de las masas a los oficiales leales, podría haber evitado que Allende tomara los riesgos de una acción enérgica contra lo que para entonces era un grupo bastante grande de oficiales involucrados en la conspiración.

La falta de una acción enérgica en ese momento, sin embargo, dio la iniciativa a la derecha, dentro y fuera de las fuerzas armadas. Por consiguiente, tanto los militares como los civiles que apoyaban a la Unidad Popular estaban desmoralizados. Y la desmoralización empeoró en las siguientes semanas cuando los dos grupos quedaron esencialmente sin dirección.⁸⁹ Algunas fábricas se convirtieron en productoras de armamentos, y por lo menos los miembros del Partido Comunista se dedicaron a obtener armas.⁹⁰ Sin embargo, la acción de la Unidad Popular durante los meses de julio y agosto, según las descripciones disponibles, parece haber estado especialmente mal coordinada, y de hecho incluso caótica.

Mientras tanto, las acciones de la derecha militar y civil estaban cada vez mejor coordinadas. Los apoyos clave de la Unidad Popular dentro de las fuerzas armadas —entre ellos el general Prats era el más importante— fueron obligados a través de maniobras a retirarse o a renunciar.⁹¹ Los militares registraron fábricas y barrios obreros buscando armas y aparentemente estaban bien informados sobre dónde encontrarlas. Los organizadores del golpe coordinaron su acción con grupos de civiles fascistas y de derecha, mientras la economía era llevada al caos por medio de huelgas organizadas por asociaciones de hombres de negocios y por cientos de actos violentos de sabotaje. Finalmente, los dirigentes demócrata cristianos comenzaron a invitar abiertamente una intervención militar.

A fines de agosto, Allende personalmente decidió implementar las proposiciones que había presentado anteriormente para crear estructuras que coordinaran la acción de los oficiales leales con organizaciones obreras.⁹² Pero era ya demasiado tarde. La Unidad Popular ya no controlaba la situación, el grupo de oficiales que organizaba la coordinación con los obreros estaba infiltrado, y la mayoría del cuerpo oficial podía ser convencido de apoyar el golpe, o por lo menos de no oponerse.

Miliband resumió la dinámica militar después del golpe del 29 de junio: la gente que es así o así en un momento, y que hacen o no esto o lo otro, *cambian* bajo el impacto de acontecimientos que se suceden con rapidez. ... Así, los hombres del ejército que son conservadores

pero constitucionalistas, en ciertas situaciones se hacen un poquito más conservadores; y esto significa que dejan de ser constitucionalistas. La pregunta obvia es qué es lo que provoca el cambio. Sin duda, en parte se debe al empeoramiento de la situación "objetiva"; en parte también es la presión generada por las fuerzas conservadoras. Pero en gran parte, se debe a la posición adoptada francamente por el gobierno del momento. ... La débil respuesta de la administración de Allende al intento de golpe del 29 de junio, su constante retiro ante las fuerzas conservadoras (y los militares) en las siguientes semanas... todo esto seguramente tuvo mucho que ver con el hecho de que los enemigos del régimen en las fuerzas armadas ... se hicieran "más y más numerosos." En estos asuntos hay una ley siempre cierta: cuanto más débil es el gobierno, más osados sus enemigos y más numerosos día con día.⁹³

Incluso durante la situación crítica de agosto, aparentemente no era tarea fácil la de convencer a los oficiales que apoyaran el golpe. Según los oficiales involucrados en la conspiración,

el mayor obstáculo ... era la tradición de cuarenta años de las fuerzas armadas de neutralidad política: "Me hubiera arrancado el pelo por enseñar a mis alumnos durante todos esos años que las fuerzas armadas no deben nunca rebelarse contra el gobierno constitucional," dijo un oficial que antes enseñaba historia en una academia militar. "Tomó mucho tiempo convencer a los oficiales de que no había otra salida."⁹⁴

De hecho, muchos oficiales nunca estuvieron convencidos. Durante el día y la noche anteriores al golpe, los oficiales de derecha purgaron a su modo las fuerzas armadas. Según sus primeras declaraciones sólo se arrestaron cincuenta oficiales,⁹⁵ pero esa aseveración ha sido desmentida por el hecho de que se han procesado a 57 oficiales sólo de la fuerza aérea por haberse resistido al golpe. Y el cuerpo oficial de la fuerza aérea tenía menos partidarios de la Unidad Popular que el del ejército. Según otras fuentes, "varios cientos" de oficiales fueron ejecutados o arrestados durante la purga; "algunas fuentes dicen que entre 2000 y 3000 miembros de las fuerzas armadas y de la policía perdieron la vida en el golpe anterior al golpe."⁹⁶

En resumen, el exitoso golpe reaccionario del 11 de septiembre de ninguna manera era inevitable. A la luz de la historia de las fuerzas armadas chilenas y de los elementos relacionados con su organización y fuerza, la estrategia frente a los militares de los Partidarios más consistentes de Allende dentro de la Unidad Popular tenía problemas pero era básicamente válida: las condiciones para un levantamiento de civiles armados no existían en Chile, y por lo tanto el gobierno debía mantener neutralidad y algún apoyo dentro del cuerpo oficial para mantenerse en el poder. Mientras que la estrategia frente a los militares era básicamente válida, estaba ligada a una orientación estratégica general muy inflexible que incluía el mantenimiento de un apoyo de la clase media y una falta

de énfasis en la organización de las mayorías. La Unidad Popular no logró la unidad táctica que le hubiera permitido contrarrestar la ofensiva fascista y de derecha, debido a que la necesidad de una organización continua y enérgica de las mayorías no fué reconocida por algunos de sus sectores importantes. Las proposiciones de Allende sobre la coordinación de los oficiales leales con organizaciones obreras podría haber sido un paso en la dirección correcta. Pero para lograrlo, se necesitaba una acción enérgica paralela en la arena política civil. En lo que a esto se refiere, es apropiada la crítica de Miliband sobre la falta de "una red de organismos de poder, paralelos y complementarios al poder del Estado que constituyera una infraestructura sólida para la 'movilización de las masas y la dirección efectiva de sus acciones a tiempo'".⁹⁷

Para lograr estructuras efectivas de doble poder cuando el sistema había llegado a una crisis, era necesario dedicarse consistentemente a su organización desde el momento en que se inauguró el gobierno. Considero que esto se podría haber llevado a cabo de tal manera que no se precipitara un golpe. La organización de las masas no implicaba acciones inconstitucionales ni el trastorno del orden público, ni armar inmediatamente a los obreros, que eran las condiciones que Allende y sus consejeros consideraban precipitadoras de un golpe por el cuerpo oficial unido. Las acciones de los oficiales leales después del 29 de junio también indican que cuando se llegó a una crisis, estaban dispuestos a actuar con las organizaciones obreras y darles armas *para defender el sistema ya que había sido legalmente constituido*. La posibilidad de dedicarse a esta estrategia, sin embargo, se dificultó por las divisiones internas de la Unidad Popular. Para la izquierda de la coalición habría implicado abandonar la idea irrealista de que los soldados armados desertarían en masa, y aceptar la necesidad de una cooperación estrecha con el sector progresista del cuerpo oficial, además del hecho de que las fuerzas armadas no podrían ser confrontadas por una insurrección del pueblo en las condiciones que prevalecían en Chile.⁹⁸ Para los moderados habría implicado la aceptación del hecho de que a largo plazo la mayor parte de la clase media *no* permanecería neutral; la lógica de las reformas de la Unidad Popular en favor de la clase obrera, tanto urbana como rural, necesariamente implicaba la negación de los intereses de importantes sectores de la clase media, que no estarían dispuestos a llegar a un acuerdo en lo que ellos consideraban el *sine qua non* para mantener su posición social económica. Si esto se hubiera advertido, la necesidad de estructuras paralelas de poder hubieran parecido más urgentes.

Naturalmente, también puede decirse que la Unidad Popular cometió serios errores políticos y de propaganda, que innecesariamente alarmaron a la clase media y al cuerpo oficial (por ejemplo, la propuesta reforma educativa), y que esos factores relativamente marginales fueron cruciales en inclinar la balanza contra la Unidad Popular en una situación en que el equilibrio de fuerzas era casi parejo; también puede decirse que las

causas fundamentales del golpe son inherentes a la posición de Chile como nación independiente y a la política internacional de los Estados Unidos en especial; y que Allende personalmente no podía proporcionar el tipo de dirección que la situación exigía. Ciertamente se cometieron errores y la situación internacional era claramente desfavorable. Los dos problemas, tanto como la dirección de Allende, deben ser analizados y evaluados con más cuidado. Sin embargo, el análisis de los problemas relacionados con la función de la clase media y de las organizaciones de mayorías, y la estrategia frente a las instituciones militares muy profesionales y capaces, serán muy importantes para cualquier examen de transformación socialista no sólo en Chile, sino en cualquiera de las "democracias occidentales".

- 1 Entre los mejores análisis de las causas fundamentales del éxito del golpe fascista del 11 de septiembre están: Ralph Miliband, "The Coup in Chile"; Ralph Miliband y John Saville (eds.), *The Socialist Register* (Londres: The Merlin Press, 1974), pp. 451-473; y Joan E. Garcés, *El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende* (Madrid: Siglo XXI, 1974), pp. 11-54. Para un recuento diario penetrante de los hechos que precedieron el golpe, ver Alain Touraine, *Vie et Mort du Chili Populaire* (Paris: Ed. du Seuil, 1973).
- 2 Para análisis críticos de la política de la Unidad Popular frente a las fuerzas armadas, ver: Paul M. Sweezy, "Chile: The Question of Power", *Monthly Review* (Vol. 25, No. 1, dic. 1973) y David Plotke, "Coup in Chile", *Socialist Revolution* (Vol. 3, N. 4, jul-ago. 1973).
- 3 Joan E. Garcés, "Chile 1971: a Revolutionary Government within a Welfare State" en Kenneth Medhurst (ed.), *Allende's Chile* (Londres: Hart-Davis MacGibbon, 1972), pp. 27-50. Ver también Gonzalo Martner, "The Economic Aspects of Allende's Government: Problems and Prospects", en el mismo libro, pp. 135-147.
- 4 El programa de gobierno de la Unidad Popular se puede encontrar en muchas publicaciones, entre las cuales están: North American Congress on Latin America (NACLA), *New Chile* (Berkeley: NACLA, 1972), pp. 130-142, y Salvador Allende, *Chile's Road to Socialism* (Middlesex: Penguin Books Ltd., 1973), pp. 23-51.
- 5 Garcés decía que tal estrategia no "excluía la idea de recurrir a la presión social —desde abajo— en casos específicos o con objetivos muy concretos." Sin embargo, según él, esto era "lo opuesto al realismo político y era una visión deformada del proceso político afirmar: 'Sugerimos a la Unidad Popular y al gobierno que apoyarse en los *protagonistas reales* del proceso social existente hubiera sido más serio y más valiente de su parte: entre febrero y octubre de este año (1971) 345,000 obreros industriales, campesinos, colonos y estudiantes han participado en huelgas y ocupaciones ilegales... 'El mantenimiento del orden público no sólo es un requisito para todo gobierno; también favorece a quien controla el gobierno'. "Chile 1971..." en Medhurst, *op. cit.*, p. 35.
- 6 Desde el golpe los carabineros han sido considerados formalmente como el cuarto sector de las fuerzas armadas; fueron integrados al Ministerio de Defensa, mientras que antes eran parte del Ministerio del Interior.
- 7 Las dos obras son: Alin Joxe, *Las fuerzas armadas en el sistema político chileno* (Santiago: Editorial Universitaria, S. A., (1970) y Roy Allen Hansen, *Military*

Culture an Organizational Decline: A Study of the Chilean Army (tesis de doctorado, U.C.L.A. 1967).

- 7a. Ver Gino Germani, *Sociologia della modernizzazione* (Barri: Editori Laterza, 1971), p. 259, y Georges Rouma, *L'Amérique Latine*, v. I (Bruselas: Renaissance du Livre, 1948), p. 421.
8. Las reformas propuestas incluían leyes sobre la seguridad social, control del Estado sobre los bancos y las compañías de seguros, la separación de la iglesia y el Estado, y la elección directa del presidente. Para más información sobre este período y de la historia política chilena en general, ver Federico G. Gil, *The Political System of Chile* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1966), y James Petras, *Politics and Social Forces in Chilean Development* (Berkeley: University of California Press, 1970).
9. Una buena y breve descripción de este período es: H.E. Bicheno, "Anti-Parliamentary Themes in Chilean History: 1920-70" en Medhurst, *op. cit.*, pp. 97-134. Aunque los oficiales progresistas lograron controlar la situación dentro de las fuerzas armadas, también había un fuerte grupo reaccionario en el cuerpo oficial, en especial en la Marina. Ver Frederick B. Pike, *Chile and the United States 1880-1962* (Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1963), pp. 178-181.
10. *Ibid.*, p. 106.
11. Hansen, *op. cit.*, p. 88. Los efectos de la represión interna fueron también la demoralización del cuerpo oficial del ejército, que había dirigido con éxito dos guerras internacionales durante el siglo diecinueve, y que se consideraba protector de la nación contra la agresión externa.
12. Ver Frederick M. Nunn, *Civil-Military Relations in Chile, 1891-1938* (tesis de doctorado, Universidad de Nuevo México, 1963), p. 145. El general del ejército Carlos Saez Morales, que vivió esos hechos, describe amargamente los favoritismos en sus *Recuerdos de un soldado: El ejército y la política* (Santiago: Biblioteca Ercilla, 1934), V. I, p. 19.
13. Hansen, *op. cit.*, p. 191.
14. *Ibid.*
15. Liisa North, *Civil-Military Relations in Argentina, Chile and Perú* (Berkeley: Institute of International Relations, University of California, 1967), pp. 34-37 y 74-75. Ver también Bicheno, *op. cit.*, p. 115-120.
16. Hansen, *op. cit.*, p. 59.
17. Ver Bicheno, *op. cit.*, pp. 126-127, y Joxe, *op. cit.*, p. 78.
18. Joxe, *op. cit.*, p. 79.
19. *Ibid.*, pp. 79-80 .
20. Los conspiradores de 1951 nombraron su grupo "Por Una Mañana Auspiciosa" o PUMA. El grupo de 1955 se llamaba "Línea Recta", y era una versión reconstituida de PUMA. *Ibid.*, p. 80.
21. *Ibid.*, p. 81.
22. Bicheno, *op. cit.*, p. 133. Ya un año antes de la rebelión de Viaux había bastante inquietud dentro del ejército respecto de salarios y otros problemas institucionales; el Ministro de Defensa fue retirado y substituido por un general que debía ocuparse de los problemas institucionales. Su inacción provocó más resentimiento y, por lo tanto, una simpatía entre los oficiales por el movimiento de Viaux, que recibió bastante apoyo de la marina, la fuerza aérea y el ejército. Viaux logró que se retirara al Ministro de la Defensa y también consiguió un aumento de salarios y equipo nuevo para el ejército del gobierno de Frei. No se hicieron cargos serios contra Viaux; sencillamente se le destituyó. Viaux probablemente

ya estaba involucrado en grupos políticos de civiles de derecha, pero deben aclararse todavía las implicaciones políticas de su rebelión de 1969. Esta información la proporcionó Claudio Durán, profesor de filosofía en York University, que antes dio cátedra en la Universidad de Chile.

- ²³ Hansen, *op. cit.*, p. 196.
- ²⁴ *Ibid.*, p. 200. Hansen también informa sobre una gran insatisfacción respecto de la elección de la carrera militar para los hijos de familias de la clase alta y media alta en Santiago, p. 295.
- ²⁵ Datos proporcionados por Claudio Durán. Su tío, que era oficial del ejército, dejó su carrera militar en 1968 por razones económicas. El profesor Durán también recuerda haber conocido a la esposa de un oficial, que trabajaba en un taxi para suplementar el ingreso familiar.
- ²⁶ *Ibid.*, p. 210. Hansen escribe: "La base de la tendencia actual hacia la incorporación de elementos de la clase media baja parece ser la disminución del prestigio de la carrera. A los jóvenes talentosos de la clase media y la alta ya no les atraía la carrera de militar. Como resultado, la base de reclutamiento se había ampliado para proveer un número suficiente de posibles oficiales." p. 211. Hansen escribe mucho sobre los militares; sin embargo, nada más tiene datos del ejército. Por lo tanto, cuando utilizo sus ideas, las aplico únicamente al ejército, excepto en los casos en que él especifica que se trata de la fuerza aérea, etcétera.
- ²⁷ *Ibid.*, p. 172.
- ²⁸ *Ibid.*, p. 170, subrayado mío. Los padres de las esposas de los 37 generales eran comerciantes (31%), profesionistas y administradores (17%), oficiales militares (14%), granjeros (31%) y empleados de oficina (6%); p. 172.
- ²⁹ Estas variaciones regionales me las indicó Claudio Durán.
- ³⁰ *Ibid.*, p. 177. En lo que se refiere a las filiaciones a organizaciones de los 37 generales retirados, Hansen escribe: "Todos los generales retirados que fueron entrevistados habían pertenecido por lo menos a una asociación militar, y más de un tercio únicamente a asociaciones militares. Entre las afiliaciones civiles predominaban organizaciones de la clase media como los Rotarios, los Masones, distintas sociedades históricas y de deportes. Sólo un general era miembro del elitista Club de Unión de Santiago, y otros cuatro de distintos clubes ecuestres de provincia que probablemente admitían miembros que provenían de la élite tradicional.", pp. 177 y 179.
- ³¹ Ver Herbert José de Souza, *Acerca del problema del Doble Poder en Chile* (Santiago: FLACSO, 1973), especialmente pp. 61-82, y *Las elecciones parlamentarias de marzo de 1973* (Santiago: FLACSO, 1973). El 2 de septiembre de 1973, Eduardo Cruz Mena, presidente del Colegio de Médicos que hizo huelga, dijo: "Es seguro que mucha gente morirá como resultado de la falta de atención médica; en la guerra se tiene que matar." Citado en "Allende's opponents orchestrate class war", *Last Post* (nov. 1973, Vol. 3, No. 6), p. 26.
- ³² Hansen, *op. cit.*, p. 178.
- ³³ Información proporcionada por Claudio Durán.
- ³⁴ Hansen, p. 170. Subrayado mío.
- ³⁵ *Ibid.*, p. 236. "En general, nuestros datos sugerían una estrecha conexión entre las opiniones políticas y la orientación del oficial en cuanto a la participación de los militares en programas de acción cívica. Los oficiales izquierdistas aceptaban la acción cívica más que los derechistas. El ochenta y nueve por ciento (N=9) de los que se identificaron como "izquierdistas" estuvieron a favor de un aumento de acción cívica, en comparación con el 52% (N=21) de los "algo izquierdistas" y 17% (N=6) de los "derechistas" y "algo derechistas", p. 248. Hansen indica

que la posición “algo izquierdistas” podría considerarse como básicamente “central” (p. 301) y, por lo tanto, he preferido considerar a los “izquierdistas” sólo como progresistas en la política.

- ³⁶ Dado que los oficiales de la fuerza aérea y de la marina provienen de los sectores económicamente más altos de la clase media —o incluso de la clase alta en el caso de la marina—, la cultura política profesional de las dos instituciones tal vez incluya valores más elitistas que los del ejército o de los carabineros.
- ³⁷ Ver Joxe, *op. cit.*, p. 95, e International Documentation on the Contemporary Church, *Chile: The Allende Years, The Coup, Under the Junta* (Nueva York: IDOC, 1973), p. 12, que cita *The Military Balance, 1973-1974* (Londres: Institute of Strategic Studies).
- ³⁸ Joxe, *op. cit.*, p. 97, e IDOC, *op. cit.*, loc. cit.
- ³⁹ *Ibid.*, p. 95.
- ⁴⁰ *Ibid.*, p. 98.
- ⁴¹ Edward González ha descrito el ejército cubano de la siguiente manera: “Para empezar, el ejército cubano tenía un bajo nivel de profesionalismo. Su personal en gran parte eran los compinches de Batista, que se habían unido con él en la “Rebelión de los sargentos” de 1933; así, el ejército estaba lleno de oficiales mayores que se habían distinguido sólo por su corrupción personal y su fidelidad al dictador. Por lo tanto, la máxima dirección en general era deficiente en muchos aspectos del profesionalismo militar: compromisos institucionales fuertes en lugar de fidelidades personales, mejoramiento en la carrera sobre la base de méritos militares en lugar de criterios políticos, adherencia a la doctrina militar, y un sentido nítido de lo que es la misión del militar...”
- “Tal ejército era capaz de funcionar como policía interna y de sofocar asaltos como el de Moncada. Pero era incapaz de sostener una campaña contrainsurgente... Corrupto desde la médula, el ejército de Batista era susceptible al soborno de los fidelistas, quienes a veces compraron su paso a través de los frentes enemigos...”, *Cuba Under Castros The Limits of Charisma* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1974), pp. 89-90.
- ⁴² IDOC, *op. cit.*, loc. cit., y las conversaciones con un ex oficial del ejército de los Estados Unidos que participaba en el programa de entrenamiento de oficiales latinoamericanos en Fort Sill, Oklahoma, en 1967.
- ⁴³ Michael T. Klare, *War Without End: American Planning for the Next Vietnams* (Nueva York: Vintage Books, 1972), pp. 276-277.
- ⁴⁴ *Ibid.*, p. 276.
- ⁴⁵ *Ibid.*, p. 279.
- ⁴⁶ *Ibid.*
- ⁴⁷ Editores, “Review of the Month: Peaceful Transition to Socialism?”, *Monthly Review* (Vol., No. 8, enero 1971), p. 10. Ver también NACLA, *op. cit.*, p. 53 y Joxe, *op. cit.*, pp. 99-110.
- ⁴⁸ Joxe, *op. cit.*, p. 103, y Klare, *op. cit.*, p. 281. No está claro si las cifras que usan Joxe y Klare incluyen el costo del entrenamiento de oficiales chilenos en bases militares de los Estados Unidos.
- ⁴⁹ Para una descripción de los programas en instituciones de entrenamiento militar de los Estados Unidos para Latinoamérica, ver Klare, *op. cit.*, pp. 295-307. Tanto los oficiales como los soldados se entrenan en bases de los Estados Unidos; por ejemplo, todos los alistados pueden seguir los cursos de “mantenimiento de aviones, electrónica, radio, entrenamiento para manejar y reparar instrumentos”, entre otros, en el Inter-American Air Force Academy en la Zona del Canal de Panamá. *Ibid.*, p. 302.

- ⁵⁰ Joxe, *op. cit.*, p. 101. Enero 1959 y 1969 el "número promedio anual de personal militar (chileno) programado para el entrenamiento" en las bases de Estados Unidos y de la Zona del Canal era de 370; Klare, *op. cit.*, p. 298.
- ⁵¹ NACLA, *op. cit.*, p. 53.
- ⁵² Klare, *op. cit.*, p. 298.
- ⁵³ Hansen, *op. cit.*, p. 203.
- ⁵⁴ Geoffrey Kemp, *Some Relationships Between U.S. Military Training in Latin America and Weapons Acquisition Patterns: 1959-1969* (Cambridge, Mass.: Center for International Studies, M.I.T., 1970), p. 4.
- ⁵⁵ *Ibid.*, p. 29.
- ⁵⁶ *Ibid.* También había en Chile MTT para la fuerza aérea y la marina.
- ⁵⁷ *Ibid.*, pp. 29 y 31.
- ⁵⁸ Sería interesante también saber en qué rangos del cuerpo oficial chileno fue más extensivo el entrenamiento de los Estados Unidos, y si hubo o no diferencias significativas en las actitudes fuertemente opuestas a la Unidad Popular entre uno y otro rango.
- ⁵⁹ Entre 1965 y 1969, el ejército chileno compró 26 helicópteros de los Estados Unidos; Kemp, *op. cit.*, p. 32 .
- ⁶⁰ NACLA, *op. cit.*, p. 53 y Joxe, *op. cit.*, p. 98.
- ⁶¹ Cf. editorial del *Monthly Review*, *op. cit.*, p. 12 y Joxe, *op. cit.*, pp. 110-111.
- ⁶² Hansen, *op. cit.*, p. 198. El hecho de que Chile en los años sesenta todavía tuviera una de las proporciones más altas de personal militar en relación con la población civil, indica que el nivel de militarización en Chile antes de los años cuarenta debe haber sido muy alto.
- ⁶³ Joxe, *op. cit.*, pp. 87-88.
- ⁶⁴ *Ibid.*, p. 97.
- ⁶⁵ Alain Joxe, "Armée Chilienne," *Les Temps Modernes* (año 29, No. 323, jun. 1973), p. 2022. En trabajos anteriores, Joxe también planteaba las posibilidades de un "populismo militar"; pero consideraba la posibilidad sólo en una situación en que la norma de vida de la clase media no estuviera amenazada por la izquierda. *Las fuerzas armadas...*, p. 113.
- ⁶⁶ J. P. Farrell (Presidente, Department of Educational Planning, The Ontario Institute for Studies in Education) conoció a un grupo de oficiales de la fuerza aérea en Santiago cuando estuvo allí con el puesto de consultor para el Ministerio de Educación entre enero de 1970 y julio de 1971. Parafraseó las actitudes de los oficiales: "Bueno, en 1958 probamos a Alessandri y nada importante le sucedió al país. En 1964 probamos a Frei, quien tampoco pudo echar a andar las cosas. Podemos igualmente probar a este tipo Allende, y a ver si puede hacer algo. Si no, probaremos a otra gente dentro de seis años." Carta del 25 de junio de 1974.
- ⁶⁷ Hansen, *op. cit.*, p. 191.
- ⁶⁸ Garcés, *op. cit.* Desde luego, había diferencias importantes dentro de la Unidad Popular, pero el resumen que he hecho refleja la posición de Allende y de sus políticos más cercanos.
- ⁶⁹ Juan Garcés, "Chile: how they killed a democratic revolution", *The Manchester Guardian Weekly* (5 de enero de 1974), p. 15, y del mismo autor, *El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende* (Madrid: Siglo XXI, 1974), pp. 20-54.
- ⁷⁰ "Chile: military influence", *Latin America* (Vol. VI, No. 49, 8 de dic. 1972), p. 386, y Joxe, "L'Armée Chilienne", p. 2029.
- ⁷¹ NACLA, *op. cit.*, p. 53.

- 72 Joxe, *op. cit.*, loc. cit.
- 73 *Ibid.*
- 74 NACLA, *op. cit.*, p. 52. Ver también los análisis de las noticias de 1972 y 1973 en *Latin America*. Para los puntos de vista de Allende acerca de la participación de los militares, ver Salvador Allende, *op. cit.*, pp. 135-137.
- 75 Conversaciones con Antonio Bandeira, refugiado político de Chile y Brasil, y estudiante de postgrado en el Departamento de Ciencias Políticas, York University.
- 76 Farrell, carta.
- 77 *Ibid.*
- 78 *Ibid.*
- 79 Esto y gran parte de los datos siguientes fueron proporcionados en una entrevista por Herbert de Souza, quien hizo investigaciones para Odeplan en 1973 y que ahora es estudiante de postgrado en el Departamento de Ciencias Políticas, York University.
- 80 *Ibid.*
- 81 "Chile: general power", *Latin America* (Vol. VIII, No. 19, 17 mayo 1974), p. 149.
- 82 "Chile: military alliance", *Latin America* (Vol. VI, No. 45, 10 noviembre 1972), p. 353.
- 83 Ver Garcés, *El Estado...*, pp. 20-23.
- 84 Farrell, carta: "Para explicar su reacción, señalaré un sentimiento bastante generalizado respecto del régimen de Allende, que observé entre muchos chilenos de la clase media que o bien apoyaban a Allende o eran neutrales, es decir que estaban preparados para tolerarlo. Podría caracterizarse por un comentario que un amigo hizo en una fiesta y que fue secundado completamente por quienes lo oyeron. 'Pueden jugar con la economía si quieren; pueden jugar con los sistemas político y social si quieren; pero pobres de ellos si tocan a mis hijos'."
- 85 *Ibid.*
- 86 Gran parte de estos datos fue proporcionada por Herbert de Souza. Ver también Garcés, "Chile: how they...", *op. cit.*, y *El Estado...*, pp. 31-54.
- 87 Jonathan Kandell, "Plotting the Coup", en IDOC, *op. cit.*, p. 24.
- 88 Garcés, *El Estado...*, p. 43.
- 89 Ver Touraine, *op. cit.*, *passim*.
- 90 Datos proporcionados por refugiados chilenos que prefieren permanecer anónimos.
- 91 Garcés, *op. cit.*, pp. 48-51.
- 92 *Ibid.*, p. 44.
- 93 Miliband, *op. cit.*, p. 463.
- 94 Kandell, *op. cit.*, pp. 23-24.
- 95 *Ibid.*, p. 24.
- 96 "Chile: enemies within", *Latin America* (Vol. VII, No. 45, 9 noviembre 1973), p. 357.
- 97 Miliband, *op. cit.*, p. 472.
- 98 Garcés, *op. cit.*, *passim* y p. 43 en especial.